



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

Registro 104/2026

/// la ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de febrero de 2026, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal doctores Carlos A. Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky, bajo la presidencia del primero de los nombrados, con el objeto de dictar sentencia en la causa **FCT 1106/2021/87/CFC8** caratulada: "**A [REDACTED], Adrián Mauricio y otros s/recurso de casación**". Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Raúl Omar Pleé y ejerce la defensa de los imputados los doctores Armando Rafael A [REDACTED] [REDACTED], Patricia Raquel M [REDACTED], Fernando C [REDACTED], Gustavo García, Rubén Alberto P [REDACTED], Guillermo Roberto M [REDACTED], Juan Carlos C [REDACTED], Héctor Horacio P [REDACTED], Juan Carlos V [REDACTED], Carlos Fidel S [REDACTED], Clarisa Yanina D [REDACTED] y Sebastián Arturo V [REDACTED].

Efectuado el sorteo para que los jueces emitan su voto, resultó establecido el siguiente orden: doctores Juan Carlos Gemignani, Carlos A. Mahiques y Mariano Hernán Borinsky.

VISTOS Y CONSIDERANDO

PRIMERO

El señor juez doctor **Juan Carlos Gemignani** dijo:

I. Que la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, provincia homónima, en fecha 04 de octubre de 2024, resolvió: "1) *Rechazar el recurso interpuesto por el Fiscal Federal interino ante el Juzgado Federal de Paso de los Libres y, en consecuencia, confirmar la resolución de fecha 11 de abril del 2024 en todo lo*



que fuera materia de apelación. 2) Hacer saber al a quo que deberá dictar una nueva resolución conforme a derecho con relación al imputado Juan Ramón C [REDACTED], respecto del delito de lavado de activos (art. 303 apartado 2 inc. a CP) por el que fue procesado en la resolución de fecha 11 de abril del 2023 (art. 445, 2do párr. del CPPN)."

II. Que contra dicha decisión el representante del Ministerio Público Fiscal, doctor Carlos A. Schaefer, interpuso recurso de casación. Remedio que fue concedido por el a quo y mantenido ante esta instancia.

III. El recurrente discurrió sobre los antecedentes de la causa y sobre la admisibilidad del recurso.

Esgrimió que la resolución es infundada, arbitraria y violatoria del debido proceso legal, afectando de esa manera la independencia de actuación del Ministerio Público Fiscal y que desconoce los compromisos internacionales que el Estado Argentino asumió como miembro del GAFI de prevenir, investigar, sancionar a los responsables del delito de blanqueo de capitales y procurar el recupero de los bienes objeto del delito.

Basó su recurso en el inciso 2° del art. 456 del CPPN, se agravio en primer término al considerar que el a quo al dictar la presente se arrogó facultades propias del magistrado de instrucción ya que el mismo hizo un arbitrario análisis de prueba a través de un informe que se incorporó en la causa principal el 16 de septiembre de 2024, antes incluso de que lo realizara el juez instructor, remarcó que se incorporó siete días antes de que llevara a cabo la audiencia prevista en el art. 454 del CPPN y que no se notificó a las partes del mismo.

Advirtió que el juez de primera instancia ordenó la realización de diligencias y sin esperar el resultado dictó el





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

sobreseimiento, siendo que luego se agregaron los resultados de las mismas. A su entender, se atribuyó facultades exclusivas de la etapa de instrucción y analizó prueba incorporada en la causa principal en trámite ante primera instancia.

Dijo que el sentenciante en vez de dictar el sobreseimiento definitivo, debió haber remitido el expediente a fin de que se incorpore la prueba, se ponga a disposición del fiscal y posteriormente se dicte una nueva resolución.

Sostuvo que la resolución debe ser anulada por resultar de un arbitrario análisis de la prueba incorporada en primera instancia, donde la Cámara se arroga facultades propias del juez instrucción y veda al fiscal la posibilidad de continuar con la acción penal pública. En consecuencia, expresó que el sobreseimiento es prematuro, contradictorio y arbitrario.

Asimismo, también se agravió de que el a quo no tuvo en consideración la complejidad de la investigación del delito de lavado de activos. Esgrimió que tal cosa incluye el análisis patrimonial de las personas humanas y jurídicas que componen las organizaciones criminales investigadas, lo que implica mayor tiempo procesal.

Destacó que de la presente investigación se formaron otros expedientes producto de los distintos hechos que habría cometido la organización criminal en cuestión. Es decir que el dictado del sobreseimiento trae aparejado un perjuicio de imposible reparación ulterior como es la afectación de la continuidad de otras causas en trámite.

Resumidamente solicitó se anule el resolutorio en



crisis, se revoque el sobreseimiento dictado en autos y se ordene la continuación del proceso según su estado. Citó jurisprudencia y doctrina en abono a su postura e hizo reserva del caso federal.

IV. Puestos los autos en Secretaría por diez días, a los fines de los artículos 465 cuarto párrafo y 466 del ordenamiento ritual, el doctor Armando Rafael A. [REDACTED] [REDACTED] hizo su presentación y expresó que el recurso debe desestimarse por falta de interés directo (art 438 CPPN) y ausencia de motivos o agravios concretos (art 450 CPPN).

En este sentido, expresó que la resolución cuestionada tiene origen en la decisión firme y consentida dictada por la Cámara de Apelaciones de Corrientes el 27/10/2023 que dispuso -en parte- revocar la calificación legal de lavado de activos, punto que no fue recurrido por el fiscal, lo cual eliminaría la capacidad de impugnación del recurrente.

Así también, sostuvo que en el caso existe doble conformidad judicial, que el impugnante sólo manifestó su disconformidad con los argumentos expuestos sin lograr refutarlos y que no se logró acreditar la existencia de una cuestión federal que habilite la intervención de esta Cámara.

Por todo ello, solicitó se declare inadmisibile el recurso interpuesto.

V. Durante la etapa prevista en los artículos 465, último párrafo y 468 del Código Procesal Penal de la Nación, el doctor Armando Rafael A. [REDACTED] [REDACTED] hizo uso de su derecho a presentar breves notas y la causa quedó en condiciones de ser resuelta.

SEGUNDO

I. En primer término, se advierte que el recurso de casación interpuesto es formalmente admisible, toda vez que la





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

sentencia recurrida es de aquellas consideradas equiparables a definitivas previstas en el art. 457 del C.P.P.N., la parte recurrente -como se verá infra- se encuentra legitimada para impugnarla -art. 458 del C.P.P.N.-, los planteos esgrimidos encuadran dentro de los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N., y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y fundamentación requeridos por el art. 463 del citado código ritual.

II. a) Primeramente, en relación a los planteos esgrimidos por la Defensa Pública Oficial ante esta instancia, en la oportunidad prevista en los arts. 465 (cuarto párrafo) y 466 del C.P.P.N.; he de precisar que, según entiendo, este tribunal de alzada debe limitarse al estudio de los motivos casatorios expuestos *ab initio* en ocasión de interponerse el recurso de que se trate, salvo, claro está, que el asunto propuesto a revisión una vez expirada esa oportunidad procesal, sea susceptible de acarrear cuestión federal dirimente o se cuestione la validez de algún acto del proceso factible de fulminárselo con nulidad absoluta.

Es que la inserción de los verbos desarrollar y ampliar contenidos en el art. 466 ídem es cabal muestra que lo que persiguió el legislador con su dictado, no era otra cosa que dar a la parte recurrente una oportunidad para que se extiendan o profundicen los motivos que fueron introducidos en la oportunidad del art. 463 del C.P.P.N., es decir, que pueda completarlos o perfeccionarlos, más no incorporar o adicionar otros no volcados en el recurso de que se trate.



Similar inteligencia le otorga a la norma examinada, la palabra autorizada del jurista Francisco J. D'Albora al aducir que: "[...] ni en la oportunidad [prevista por el art. 466 del C.P.P.N.] ni durante la audiencia establecida por el art. 468 las partes se encuentran facultadas para introducir nuevos motivos de casación; éstos quedan fijados a través del escrito de interposición y sólo pueden ser ampliados o desarrollados luego [...]. Salvo que se trate de nulidades insubsanables, pues pueden ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso" (confr. "Código Procesal Penal de la Nación", Editorial Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 2002, pág. 1026).

Haciendo foco en esa exégesis, me veo entonces obligado a tratar el planteo atinente a la capacidad recursiva del recurrente.

Al respecto, he de señalar que frente a lo resuelto el 27/10/2023 por la Cámara de Apelaciones de Corrientes, el recurrente carecía de agravio actual y concreto.

La Cámara -en respuesta a una queja relativa a la falta de determinación del hecho y a la ausencia de elementos probatorios en orden al delito de lavado de activos-, fundamentó la revocación del procesamiento respecto de la figura de mención atribuida de la siguiente manera: "...de la lectura del auto recurrido no surge una explicación razonada que permita vincular a los nombrados con el hecho consistente en poner en circulación bienes provenientes de un ilícito penal.

En efecto, en la resolución que se impugna, el juzgador se limitó a establecer cuáles serían algunos de los bienes que los imputados tendrían a su nombre, sin indicar la fecha de adquisición de aquéllos y la vinculación existente entre dicha adquisición y el contrabando de exportación que les atribuye como





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

delito precedente. De hecho, siquiera explica si los bienes en cuestión superarían la suma de \$300.000 (pesos trescientos mil) impuestos por el legislador a los fines de la configuración del mentado tipo penal.

En consecuencia, si bien el auto de procesamiento no exige una exhaustiva descripción del hecho, ni certeza apodíctica sobre su comisión, lo cierto es que la simple afirmación de que los imputados habrían "disimulado y puesto en circulación las ganancias en dinero en efectivo provenientes del contrabando de mercaderías", no resulta suficiente para su atribución.

Máxime, cuando el lavado de activos implica una actividad muy compleja que se vale de un inagotable catálogo de técnicas que apunta "a la inversión de los beneficios económicos del ilícito y a su confusión con operaciones comerciales lícitas para borrar sus huellas" (Cfr. CNCCorr., sala de feria I, "Inc. Mendoza", del 31135, J.B.A. 9337), nada de lo cual surge del relato del instructor, violándose así el deber de fundamentación exigido (art. 123 del CPPN) y, consecuentemente, el derecho de defensa de los involucrados (art. 18 CN)."

Se desprende de ello, que el a quo expresó la existencia de una mínima o nula explicación, certeza, vinculación y descripción entre los imputados, los hechos y los bienes. Consideró asimismo la complejidad de las maniobras sin atender que la etapa procesal en curso no requiere certeza absoluta y asumiendo que lo recolectado, conocido e investigado en la presente causa hasta el momento no era suficiente para una imputación.



Conforme esto, posteriormente y en acatamiento a lo allí resuelto se dictó el sobreseimiento que luego fue confirmado por cámara -resolución que aquí se analiza-, siendo que ante el dictado de esas sentencias remisorias la parte recurrente recién se hizo de un agravio actual y concreto que la habilitaba a impugnar lo resuelto.

En virtud de ello, el agravio planteado por la defensa no ha de progresar.

b) Sorteado el test de admisibilidad, corresponde recordar que el 11/04/2023 el Juzgado Federal de Paso de los Libres dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Adrián Mauricio A [REDACTED], Franco Antonio Z [REDACTED], Ramón Alberto M [REDACTED], Eduardo Saul A [REDACTED], Rubén Darío P [REDACTED], Roberto Ernesto R [REDACTED], Roberto Ramón Rup [REDACTED], Marcelo Alberto G [REDACTED], Federico Exequiel Y [REDACTED], Luis Alberto R [REDACTED], Juan Ramón C [REDACTED] y Roberto Raúl F [REDACTED] -entre otros- por la comisión de los delitos de contrabando de mercadería y lavado de activos, e hizo lo mismo respecto de Zunilda del Lujan G [REDACTED] aunque sólo en relación al último de los delitos de mención.

El 27/10/2023, la Cámara de Apelaciones de Corrientes -como se mencionó en el punto anterior-, revocó parcialmente el procesamiento, esto es exclusivamente en lo atinente a los hechos calificados como lavado de activos.

Luego, el 11/04/2024, dicho juzgado resolvió sobreseer total y definitivamente a G [REDACTED] -quién sólo se encontraba procesada por el delito de lavado de activos-; y -parcialmente- a A [REDACTED], Z [REDACTED], M [REDACTED], A [REDACTED], P [REDACTED], R [REDACTED], Rup [REDACTED], G [REDACTED], Y [REDACTED], R [REDACTED] y F [REDACTED] en orden al mismo delito, previsto en el art. 303 CP apartados 1 y 2 inc. a) del C.P.

Tal pieza procesal fue apelada y producto de ello se





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

dictó la resolución dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes del 04/10/24, que es traída aquí a estudio, la cual ordenó confirmar la resolución de fecha 11/04/24 e hizo saber al juzgado instructor que deberá dictar resolución con relación al imputado Juan Ramón C [REDACTED] por el delito de lavado de activos debido a que omitió resolver su situación anteriormente.

III. Al resolver, los Jueces de Cámara recordaron primeramente que para arribar a la resolución del 04 abril de 2024, el juez tuvo en cuenta lo decidido por dicha Cámara de Apelaciones el 27/10/2023, momento en que se revocó el procesamiento dictado contra los imputados por falta de elementos típicos para la configuración del delito que se investiga.

Luego y en respuesta a los agravios planteados como ser el carácter prematuro de la resolución dictada por falta de valoración de todos los elementos de prueba y su arbitrariedad en consecuencia, dijeron que del informe elaborado por la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura de Monte Caseros -incorporado al expediente el 16/9/24-, no surgen datos relevantes en relación al delito de lavado de activos que hubieran podido cambiar el temperamento adoptado por el juzgador al sobreseer a los imputados.

En tal sentido, sostuvieron que el informe tampoco permite cumplimentar lo requerido por dicha Alzada en fecha 27/10/2023 relativo a la fecha de adquisición de los bienes que forman parte de la investigación, la vinculación de los mismos con el delito precedente de contrabando y tampoco determina si los bienes en cuestión superarían los trescientos mil pesos que



impone el tipo penal, ya que esos datos no se desprenden del mismo.

Luego transcribieron párrafos del mencionado informe en donde se describen las situaciones personales y económicas de algunos de los imputados y las conclusiones que indicarían las maniobras específicas que llevaron a cabo para cometer el ilícito y la configuración del delito de lavado de activos.

En relación a ello, esgrimieron que se trata de afirmaciones genéricas sin sustento fáctico ya que el lavado de activos implica una actividad muy compleja con un amplio catálogo de técnicas que buscan invertir el dinero ilícito y a su confusión con operaciones comerciales lícitas a los fines de no dejar rastros; y que las precisiones requeridas no surgen ni del procesamiento de fecha 11/04/2023, ni del informe incorporado recientemente.

En continuidad, y a pesar de que del informe se desprende que en los autos, además del contrabando agravado y la asociación ilícita, se configura el lavado de activos, dijeron que dicha facultad es propia del juez que es quien debe realizar la vinculación de los imputados al hecho delictivo que les atribuye de manera precisa y circunstanciada en base a la prueba colectada, para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de defensa.

Por último, expresaron que la causa data del año 2021 y que la investigación se encuentra delegada en el Ministerio Público Fiscal desde hace ya un tiempo razonable.

Concluyeron diciendo que con los elementos colectados hasta ese momento no se logró precisar el hecho que encuadraría en la figura de lavado de activos y la participación de los imputados en él, siendo por ende la consecuencia el dictado del





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

sobreseimiento.

IV. Sentado cuanto precede, confrontada la evidencia reunida y el contexto objetivo del cual fueron obtenidas, entiendo que no se desprenden por el momento, elementos que permitan sostener la presencia de certeza negativa que requiere el ordenamiento procesal para dictar un sobreseimiento (art. 336 CP.P.N.) respecto de los imputados.

En efecto, los elementos señalados en el recurso del acusador público, aparecen como suficientes para considerar prematura la decisión adoptada a fin de develarse si la actividad de los investigados en relación al delito de lavado de activos, es merecedora de reproche penal o no.

Repárese en qué tanto de las apreciaciones del recurrente, como del fallo cuestionado, surge que el eje argumental se centra en la falta de probanzas, en el incumplimiento de requisitos o en la insuficiencia de la descripción de circunstancias relacionadas a los hechos objeto de investigación, lo que no permite despejar las dudas inherentes al caso en su totalidad y convierte en necesario y conveniente la profundización de la investigación en ese sentido.

Recordemos que las probanzas de la causa no pueden ser consideradas aisladamente sino valoradas en su conjunto, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos de confrontación, conforme con las reglas de la sana crítica con el fin de despejar el estado de duda, cuestión que no ocurrió en la presente. En efecto, lo decidido revela un análisis del plexo probatorio parcializado sin evaluar profundamente la posibilidad



de que la conducta descubierta encierre la intervención de los nombrados en otros tipos penales que requieren la presencia de delitos precedentes como el contrabando.

Se observa entonces que la decisión recurrida adolece de fundamentación aparente, lo que pone en evidencia su arbitrariedad y la descalifica como acto procesal válido.

Así las cosas, a la luz de la conclusión a la que arribé entiendo que la decisión de la Cámara de Apelaciones que confirmó el sobreseimiento dictado por el magistrado instructor no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las constancias que surgen de la causa, exhibe una fundamentación aparente y, por ende, debe ser dejada sin efecto. (arts. 123 y 404 inc. 2° del CPPN).

V. Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo **HACER LUGAR** al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, **ANULAR** la resolución dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y su antecedente necesario y **REMITIR** las presentes actuaciones al tribunal *a quo* para que tome razón de lo aquí decidido y luego las envíe al juzgado de origen a los fines de que continúe con la sustanciación del proceso según su estado. Sin costas en esta instancia (arts. 530 y 532 del C.P.P.N.). Tener presente la reserva del caso federal.

Así voto.

El señor juez doctor **Carlos A. Mahiques** dijo:

I. En las particulares circunstancias de la causa, adhiero, en lo sustancial, a las consideraciones y a la propuesta de hacer lugar al recurso de casación presentado por el representante del Ministerio Público Fiscal, expresadas en su voto por el colega Juan Carlos Gemignani, con una serie de





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

puntualizaciones.

Adhiero también al hecho de que la resolución bajo análisis conforma agravios concretos y actuales que habilitan al Ministerio Público Fiscal a recurrir la decisión adoptada por el tribunal de mérito.

II. Ahora bien, sin perjuicio de las "generalidades" alegadas por la Cámara Federal en lo que respecta a las conclusiones del informe de Prefectura Naval Argentina (PNA) al que hace referencia, lo cierto es que, por un lado, el *a quo* afirma que no surgen datos relevantes de dicho informe en relación con el delito de lavado de activos que puedan modificar el temperamento adoptado por el juzgador al sobreseer a los imputados. Pero, por el otro, el informe alude a una serie de actividades como la recepción de dinero en moneda extranjera producto del contrabando de bienes cuyo destinatario habría sido Azcárate y algunos de los otros imputados por el delito de lavado de activos (sólo por citar algunos ejemplos cfr. págs. 165, 166, 169/170 de la primera parte del informe, 174, 175, 177, 178/181, 184/5 -con sus referencias- de la segunda parte del informe de PNA). También se hace mención del vínculo de operaciones con el supermercado "El N [REDACTED]", la agencia "M&M" a [REDACTED] y otros locales que ameritan un análisis más profundo e integral de esta prueba que debe ser valorada con los restantes informes obrantes en la causa.

De este modo, no es acertada la afirmación del juez de instrucción en cuanto a que las conductas de los imputados no constituyen delito por cuanto nos hallamos frente a un problema



de calificación y no de falta de pruebas. En consecuencia, tampoco lo es la confirmación de Cámara aquí en estudio.

De hecho, la propia Cámara Federal, al revocar los procesamientos en primer término, señaló como déficit que el juez de instrucción se limitó a establecer cuáles eran algunos de los bienes que los imputados tenían a su nombre. Pero remarcó que el juez instructor no había indicado ni la fecha de adquisición de aquellos ni la vinculación existente entre dicha adquisición y el contrabando de exportación que les atribuyó como delito precedente. En lugar de analizar la información en el sentido señalado por la Cámara Federal, el juzgador resolvió dictar el sobreseimiento en los términos señalados en el párrafo anterior.

A pesar de lo considerado por la Cámara decisora al confirmar el sobreseimiento, no correspondía al informe de PNA agotar las respuestas a las deficiencias señaladas en la resolución referida en el párrafo anterior. Por el contrario, constituye un informe complementario que debe ser ponderado con el resto de la prueba agregada al legajo.

Como quedó demostrado, la investigación cuenta con un listado de bienes no justificados por los imputados (detallados, por ejemplo, en la resolución de procesamientos ya mencionada) que deberán ser valorados a partir de la presente prueba y de la restante presentada en el expediente. Además, deberá examinarse el período que se considere en relación con el delito precedente y la fecha de adquisición de esos bienes. En su caso, podrá también meritarse si los bienes guardan relación con el nivel de vida de los imputados, si hay actividades económicas o comerciales legales que justifiquen los ingresos para adquirir esos bienes, así como las explicaciones de los imputados, entre otros factores referidos al tipo penal de lavado de activos.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

Resulta relevante tomar en consideración el estado de la investigación que se transita y que no existe certeza negativa de la ausencia total de responsabilidad de los imputados en los delitos que se investigan. Por lo tanto, el sobreseimiento dictado resulta prematuro en los términos desarrollados en el sufragio que inaugura el acuerdo.

No se debe olvidar que todo sobreseimiento es una resolución judicial que extingue el proceso de manera definitiva e irrevocable. De allí que requiere el convencimiento acerca de la existencia de alguna de las causales taxativas que enumera la ley. Asimismo, la persona acusada debe aparecer en forma indudable y evidente exenta de responsabilidad, de manera tal que no exista duda, condiciones que, por los fundamentos dados precedentemente, no se verifican en el caso (Confr. causa n° CFP 6606/2015/50/CFC1, caratulada *Manzur, Juan Luis y otros s/recurso de casación*, reg. n° 1150/17, rta. 12/10/17; CCC 60999/2014/5/CFC1 del registro de esta Sala, caratulada *Gómez, Gisele s/recurso de casación*, reg. n° 2381/19, rta. el 19/12/19).

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo reciente con cita del dictamen del Procurador General, destacó la necesidad de evitar decisiones de sobreseimiento que, por su anticipación o formalismo, obstaculicen el ejercicio regular de las atribuciones de los órganos especializados del Estado. No debe frustrarse la posibilidad de esclarecer el origen ilícito de los bienes y de cumplir con los compromisos internacionales de persecución efectiva del lavado de activos derivados, entre otros, de la



Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción en materia de investigación, sanción y decomiso de activos de origen ilícito (CSJN caso CFP 3878/2013/4/1/CS1, *Pochetti, Carolina s/ legajo de casación*, rto. el 28/10/2025).

Si bien los magistrados cuentan con margen de discrecionalidad a la hora de valorar la prueba y seleccionar aquella útil y conducente a los fines del proceso, tienen como límite la razonabilidad en la apreciación de la prueba producida y en el valor que esta asume para la determinación de los hechos. Es que, como tantas veces se ha dicho, para cumplir con aquel deber de fundamentación, corresponde realizar un análisis crítico, razonado y circunstanciado de las constancias del proceso, sin omitir la evaluación de todas aquellas cuestiones conducentes para el desenlace del caso.

En el catálogo de las sentencias arbitrarias ingresan aquellas que se dictan sin considerar constancias o pruebas decisivas o conducentes para la adecuada solución del caso (cfr. Fallos 268:48; 268:393; 295:790) y cuya valoración puede ser de importancia para alterar el significado del juicio (Fallos 284:115; 324:915).

El presente no implica adelantar un criterio sobre la cuestión de fondo, sino que de dicha ponderación se derivará si se cuenta con elementos para proceder, o no, a la imputación por el delito de lavado de activos.

III. En tales condiciones, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Fiscal General y, en consecuencia, casar y anular la resolución recurrida, sin costas (arts. 456 inciso 1º y 2º, 470, 471, 530 y 531 a *contrario sensu* del CPPN), reenviando las actuaciones a su origen para





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

proseguir con la sustanciación de la causa según su estado.

Tal es mi voto.

El señor juez **doctor Mariano H. Borinsky** dijo:

En atención a las circunstancias relevantes del caso, comparto en lo sustancial las consideraciones expuestas por mi colega que lidera el Acuerdo, doctor Juan Carlos Gemignani, y adhiero a la solución que allí propone.

Tan solo cabe destacar que la Cámara *a quo* no ha analizado en forma suficiente los extremos del cuadro fáctico-probatorio que resultan esenciales tanto para el examen del caso como para alcanzar, con sustento, la certeza negativa que requiere un temperamento de carácter desvinculante como el que se encuentra bajo análisis.

En ese contexto, cabe recordar que el sobreseimiento exige un estado de certeza sobre la existencia de la causal en que se fundamenta. Procede cuando el tribunal no le quede duda acerca de la extinción de la pretensión penal, de la falta de responsabilidad del imputado o de que debe ser exento de pena (cfr. en lo pertinente y aplicable, causas FCR 52019408/2013/1/CFC1, "Mieres Martín y otros s/ recurso de casación", reg. nro. 1212/18.4, rta. 14/09/18; CPE 768/2010/6/1/CFC1, "Bladimirsquy, José Fernando y otros s/recurso de casación", reg. nro. 1782/18, rta. 15/11/18; CFP 5092/2017/5/CFC1, caratulada: "Achata Iquize, Remberto s/recurso de casación", reg. nro. 358/21.4, rta. 06/04/21; FMP 32005408/2008/4/1/CFC1, "Cano, Edgardo Fabián s/ recurso de casación", reg. nro. 741/22.4, rta. 10/06/22; FTU



35426/2018/CFC1, "Daura, Miguel Ángel y otro s/recurso de casación", reg. nro. 875/22, rta. 01/07/22 y CFP 3645/2022/2/CFC1, "Pérez, Víctor s/ recurso de casación", reg. nro. 1879/23, rta. 26/12/23 - todas de esta Sala IV de la C.F.C.P., entre otras-).

La necesidad de certeza negativa para sobreseer a una persona con respecto a determinado hecho resulta un mandato procesal esencial (C.S.J.N., M.1232.XLIV, "Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/ denuncia Las Palomitas - Cabeza de Buey s/ homicidio, privación ilegítima de la libertad y otros", rta. el 26/09/12, y C.F.C.P., Sala IV, causas nro. 946/2013, "Pereyra, Mario Ariel s/recurso de casación", reg. nro. 672/14, rta. 24/04/14, y CPE 921/2012/CFC2 "Bossio Diego s/ recurso de casación", reg. nro. 1139/17, rta. 31/08/17); extremo que, por el momento, no se verifica en el sub lite.

No puede soslayarse que el art. 335 del C.P.P.N. dispone que, en caso de adquirir firmeza, el sobreseimiento "cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado a cuyo favor se dicta", lo que reafirma la necesidad de que exista certeza para su dictado. No corresponde adoptar dicha solución si, tal como se verifica en el caso, está ausente "la certeza que requiere el ordenamiento procesal para sobreseer" (cfr. en lo pertinente y aplicable, causas CCC 39906/2012/4/CFC1, "D'astolfo, Norberto José s/recurso de casación", reg. nro. 830/16.4, rta. 30/06/16; CFP 2161/2011/2/CFC1, "Cabeza, Eduardo Raúl y otros s/recurso de casación", reg. nro. 1885/17.4, rta. 28/12/17; FRE 2021/2014/70/CFC17, "Valles Cristián Edgardo y otros s/ recurso de casación", reg. nro. 945/18.4, rta. 08/08/18; FMP 21675/2014/142/1/CFC10, "Santoro, Ciro Mario s/ recurso de casación", reg. nro. 1008/21, rta. 05/07/21 y CFP





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

5097/2021/2/CFC1, "Rodríguez Eguavil", reg. nro. 1357/22, rta. 06/10/22, todas de la Sala IV de la C.F.C.P. -entre otras-).

En definitiva, el fallo recurrido, en cuanto fuera objeto de examen en el presente incidente, resulta prematuro y se apoya en una fundamentación aparente -equiparable a la ausencia de fundamentación suficiente-, por lo que corresponde su descalificación como acto jurisdiccional válido.

Por lo expuesto, corresponde: HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el representante fiscal, ANULAR el decisorio recurrido -y su antecedente necesario- y REMITIR las presentes actuaciones al tribunal a quo para que tome razón de lo aquí decidido y luego las envíe al juzgado de origen a los fines de que continúe con la sustanciación del proceso según su estado. SIN COSTAS en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal,

RESUELVE:

I. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, **ANULAR** la resolución dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y su antecedente necesario y **REMITIR** las presentes actuaciones al tribunal a quo para que tome razón de lo aquí decidido y luego las envíe al juzgado de origen a los fines de que continúe con la sustanciación del proceso según su estado. Sin costas en esta instancia (art. 530 y concordantes del C.P.P.N.).

II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal efectuada.



Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

